



Asamblea General

Quincuagésimo tercer período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
24 de marzo de 1999
Español
Original: inglés

Quinta Comisión

Acta resumida de la 32ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 20 de noviembre de 1998, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Abelian (Armenia)
Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto: Sr. Mselle

Sumario

Tema 111 del programa: Informes financieros y estados financieros comprobados e informes de la Junta de Auditores (*continuación*)

Tema 135 del programa: Financiación del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991

Tema 137 del programa: Financiación del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994

Otros asuntos

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

Se declara abierta la sesión a las 15.00 horas.

Tema 111 del programa: informes financieros y estados financieros comprobados e informes de la Junta de Auditores (*continuación*) (A/52/5 (vol. II), A/52/867, A/52/811 y A/52/879; A/53/5 (vols. I, III y IV), A/53/5/Add.1 a 10, A/53/217, A/53/335 y Add.1, A/53/508 y A/53/513)

1. El Sr. **Fakhouri** (Director de la División de Servicios Financieros de Información de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR)), dice que el ACNUR atribuye una gran importancia al proceso de auditoría tanto como mecanismo de fiscalización como en cuanto instrumento de gestión. Ha tomado nota de las preocupaciones manifestadas en las esferas del reconocimiento de ingresos, certificación de auditoría e informes bienales sobre comprobación de cuentas.

2. Con respecto a la preocupación manifestada en el sentido de que se están sobrevalorando los ingresos, el orador afirma que el ACNUR utiliza en sus estados financieros un sistema de valores devengados para la contabilización de los ingresos. En otras palabras, los ingresos se registran cuando son exigibles y no cuando se reciben. En el artículo 35 de las normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas, se estipula que las contribuciones voluntarias a fondos para fines concretos se deben registrar solamente cuando se hayan recibido. Sin embargo la aplicación de dicho artículo a los programas y actividades especiales del ACNUR, tendría graves consecuencias, ya que influiría en la capacidad de dicho organismo para realizar las actividades de su mandato hasta que se hayan recibido los fondos. Los retrasos en la recepción de los fondos podrían obligar a suspender las actividades de los programas hasta recibirlos. En su informe, la CCAAP comparte las reservas del Alto Comisionado en cuanto a la aplicación del artículo 35, excepto cuando se trata del Fondo Fiduciario. En opinión de su Comité Ejecutivo, el ACNUR debe continuar registrando los ingresos de acuerdo con la práctica que se sigue actualmente. La solución del problema pasaría por tratar de adoptar una estructura presupuestaria unificada.

3. En cuanto a la certificación de la auditoría, en 1997 el ACNUR ha canalizado 421 millones de dólares EE.UU. a través de 685 instituciones asociadas en la ejecución, de las cuales 160 son gubernamentales y 518 organizaciones no gubernamentales locales e internacionales. El ACNUR se ha comprometido a cumplir plenamente las normas de certificación.

4. En cuanto al sistema de presentación de informes bienales, el orador afirma que el ACNUR presenta presupuestos e informes anuales a su Comité Ejecutivo, lo cual representa una garantía para los donantes, ya que la correcta utilización de los fondos se certifica anualmente. El Comité Ejecutivo ha manifestado su preferencia por el ciclo de auditoría anual, mientras que la CCAAP ha recomendado la adopción de un ciclo bienal. El ACNUR agradece el asesoramiento de la CCAAP y reconoce las ventajas de una práctica contable normalizada. Además, el ciclo bienal daría más tiempo para la preparación de los informes. No obstante, dicha mejora se conseguiría a expensas de la confianza que el Comité Ejecutivo ha demostrado en las operaciones del ACNUR.

5. La Sra. **Sham Poo** (Directora Ejecutiva Adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) dice que, como se ha señalado en el informe de la Junta de Auditores (A/53/5/Add.2, cap. II, párr. 12), la asistencia en efectivo a los gobiernos proporciona fondos a éstos para apoyar la aplicación de los programas. La propiedad de los fondos se transfiere al gobierno en el momento en que se realiza el pago; sin embargo, el UNICEF tiene la responsabilidad de garantizar que dichos fondos se utilizan para los fines previstos. El UNICEF exige a los gobiernos que justifiquen la utilización de la ayuda recibida. El pago de la asistencia en efectivo se realiza de forma continuada, de conformidad con el plan de acción establecido en el programa de cooperación con los gobiernos de que se trate. En cualquier momento del ejercicio económico puede prestarse a los gobiernos asistencia en efectivo no liquidada, consistente en aquellos pagos por los que no se ha recibido todavía la documentación.

6. Es significativo, como señala la Junta en su informe (A/53/5/Add.2, cap. II, párr. 14), que el saldo pendiente de pago durante más de nueve meses haya disminuido de 34,3 millones de dólares al 31 de diciembre de 1995 a 11,1 millones de dólares al 31 de diciembre de 1997, lo que demuestra que la acción iniciada por el UNICEF para reforzar la vigilancia de la asistencia en efectivo ha resultado eficaz. La medida incluye la celebración de seminarios prácticos sobre reorganización del proceso de actividades y en autoevaluación de la fiscalización. Se han organizado también seminarios prácticos en muchos países con el personal de contraparte de los gobiernos a fin de llegar a un mejor entendimiento de los documentos que se necesitan para la asistencia en efectivo.

7. La asistencia en efectivo es un componente muy importante de los programas de cooperación del UNICEF y, si disminuyera de pronto sustancialmente, cabría la preocupación de que no se ejecutaran los planes de los programas. En su informe para el bienio que finaliza el 31 de diciembre

de 1995, la Junta recomienda al UNICEF que examine la política de registrar la asistencia en efectivo a los gobiernos, de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero y su manual de política y procedimientos contables. Durante el bienio siguiente, el UNICEF ha realizado un examen de las normas contables y de las políticas y procedimientos de programas conexos cuyos resultados han confirmado que el UNICEF ha sido coherente en su política de registrar la asistencia en efectivo, pero que una norma financiera aprobada en 1988 por la que se definen los gastos del programa, resulta confusa y difícil de interpretar. El UNICEF ha informado a la Junta que, para rectificar tal situación, evaluará y actualizará su reglamento financiero y que realizará un análisis similar con respecto a su reglamentación financiera, manuales e instrucciones de política. En cuanto a la sugerencia de la Comisión Consultiva en el sentido de que se consulte con otros fondos y programas, el UNICEF mantiene un estrecho contacto con otros fondos y programas sobre muchos temas de interés común.

8. El tema de los sobrecostos en los proyectos de construcción gestionados por el PNUD ha sido objeto de un reciente análisis por parte de este Programa, que ha dado lugar a una investigación criminal de dos personas y a la adopción de medidas disciplinarias con respecto a otras. Aunque los costos han sido facturados en exceso con respecto a lo que en un principio se había acordado, el UNICEF no los ha pagado por no estar debidamente justificados. Tal como recomienda la Junta, el UNICEF ha pedido al PNUD documentos justificantes de los sobrecostos, que el PNUD no ha sido capaz de facilitar por razones que se han hecho evidentes durante el curso de la investigación del PNUD.

9. El UNICEF no está plenamente de acuerdo con la interpretación de la Junta de la decisión 1990/26. En dicha decisión, la Junta Ejecutiva del UNICEF ha decidido establecer un fondo de reserva para oficinas exteriores. El documento E/ICEF/1990/AB/L.8 contiene, solamente con fines informativos, un anexo en el que se calcula la parte proporcional correspondiente al UNICEF de los 15 proyectos por países. El UNICEF tratará de conseguir aclaración de la Junta Ejecutiva cuando examine los estados financieros correspondientes al bienio 1996–1997.

10. El UNICEF ha reforzado la gestión de los acuerdos de servicios especiales para tratar de cumplir mejor con las instrucciones administrativas y de obtener un mayor valor del dinero. Las oficinas informan ahora de que cada trimestre se establecen acuerdos de servicios especiales. La Administración ha recordado a las oficinas que los acuerdos deben firmarse antes de que comiencen los trabajos y que no pueden prorrogarse sin las evaluaciones por escrito de los trabajos previos realizados. Se han publicado nuevas instrucciones

con respecto a la aplicabilidad de la selección competitiva, la justificación de seleccionar una única fuente de suministro, el mantenimiento de las listas y las escalas de los honorarios. La Administración ha dejado claro que los jefes de oficina y el resto del personal con facultad para firmar contratos dejarán de gozar de dicha facultad si no cumplen con esas instrucciones.

11. Con respecto a la recomendación de la Comisión Consultiva en el sentido de que el Director Ejecutivo informe a la Junta Ejecutiva sobre las medidas adoptadas en relación con las conclusiones de la Junta de Auditores, la oradora afirma que la práctica actual es que el UNICEF presente un informe a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Consultiva, sobre las medidas que hay que adoptar para aplicar las recomendaciones de la Junta de Auditores, y el estado en que se encuentra la aplicación de las recomendaciones del bienio anterior. La Junta Ejecutiva del UNICEF ha examinado el último informe en su segundo período ordinario de sesiones, celebrado en septiembre de 1998. Además, de conformidad con la decisión 1997/10, el Director Ejecutivo ha hecho una actualización oral ante la Junta Ejecutiva para los años en que el UNICEF no presentaba un informe por escrito, sistema utilizado por primera vez en el primer período ordinario de sesiones, de enero de 1998. El UNICEF ha presentado asimismo a su Junta Ejecutiva informes periódicos sobre la marcha del Programa de Excelencia de la Gestión, que abarca el sistema común de examen y evaluación y de rendición de cuentas, con respecto a la supervisión y vigilancia del rendimiento de los proyectos en el UNICEF.

12. En el UNICEF hay directrices muy estrictas para la determinación, notificación y enjuiciamiento de los fraudes y presuntos fraudes. Mediante el Programa de Excelencia de la Gestión, se ha transmitido a todo el personal el mensaje de que todos son plenamente responsables de proteger los recursos del UNICEF.

13. La Administración del UNICEF ha tomado disposiciones importantes para ocuparse del problema del año 2000. Está eliminando gradualmente los sistemas antiguos, no adaptados al nuevo siglo, y pondrá en marcha un sistema, tanto sobre el terreno como en la sede, que se ajuste a las exigencias del año 2000. Además, la Administración del UNICEF ha enviado instrucciones a todas las oficinas sobre la manera de prepararse para el año 2000 y continuará transmitiéndoles información al respecto. Está preparando un ejercicio de simulación que aparecerá en 1999 en fecha suficientemente próxima, para que se pueda tomar cualquier medida correctiva necesaria.

14. El Sr. Shunglu (Presidente de la Junta de Auditores), informa, como respuesta a las observaciones y preguntas de

los miembros con respecto a sus informes, que la Junta continúa investigando la manera de mejorar sus métodos de presentación de informes y acoge con satisfacción el apoyo manifestado en cuanto a la obtención de nuevos recursos para sus actividades. Comparte la preocupación sobre la aplicación de sus recomendaciones y está de acuerdo en que se necesitan esfuerzos por parte de la Administración para conseguir corregir plenamente las deficiencias encontradas.

15. La Junta comparte asimismo las inquietudes manifestadas en cuanto a la administración del activo y a los problemas relativos a la transferencia de propiedad de las operaciones de mantenimiento de la paz a un coste adicional para la Organización. Dichas misiones deben liquidarse rápidamente para evitar un aumento indebido de los costos. La Administración ha de hacer frente seriamente a los problemas en curso, mediante la contratación y evaluación de los consultores. La Junta supervisará el cumplimiento de las directrices en esa esfera de actividades y reitera que deben aplicarse íntegramente las normas contables de las Naciones Unidas.

16. En cuanto a la cuestión de la gestión de compras, la Junta ha tenido en cuenta la petición de que durante el bienio 1998–1999, se realice una comprobación de cuentas horizontal. Para aclarar su sugerencia de que se tengan en cuenta los retrasos en la recaudación de cuotas, en los estados financieros se pone de manifiesto el hecho de que no se hayan recibido todos los ingresos devengados y, como las contribuciones no se pueden pasar a pérdidas, la situación de los recursos presentada resulta más exacta.

17. La Junta comparte las preocupaciones manifestadas con respecto al ritmo con que se hacen los preparativos para abordar los problemas planteados por la llegada del año 2000. Las organizaciones que no hayan evaluado todavía sus sistemas centrales de información deben adoptar medidas urgentes.

18. En cuanto al comentario del representante del Canadá en el sentido de que las conclusiones de la Junta comprenden cuestiones menores con respecto a la conformidad, el orador afirma que dichas cuestiones son cruciales en lo que respecta al examen, supervisión y control de los proyectos. Cuando la supervisión de la sede se debilita, pueden surgir otros problemas capaces de provocar efectos considerables en la gestión de proyectos. Con respecto a la necesidad de poner los informes a disposición de la Quinta Comisión al comienzo de su período de sesiones, afirma que la Junta de Auditores necesita tres meses para terminar sus informes a partir del momento en que se envían los estados financieros a los equipos de auditores. De acuerdo con la Reglamentación Financiera, los estados financieros deben entregarse a la Junta a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al final del bienio. Para el bienio 1996–1997, los estados financieros se

han recibido el 16 de abril de 1998 y los informes se han emitido el 15 de julio, dos semanas antes que en el bienio anterior.

19. La Junta está totalmente de acuerdo en que el cumplimiento de las normas contables y la aplicación de los controles financieros servirá para reducir al mínimo el fraude en todo el sistema. Se podrían utilizar las directrices aprobadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores como base para elaborar un conjunto de normas para las Naciones Unidas, que deberán presentarse a la Asamblea General para su aprobación.

Tema 135 del programa: Financiación del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991 (A/52/520 y A/52/891; A/53/651 y A/C.5/52/47; A/C.5/53/12 y A/C.5/53/13)

Tema 137 del programa: Financiación del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Rwanda y de los ciudadanos rwandeses presuntamente responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994 (A/52/520 y A/52/784; A/53/659; A/C.5/52/48; A/C.5/53/14 y A/C.5/53/15)

20. El Sr. Sach (Director de la División de Planificación de Programas y Presupuesto) señala a la atención de los asistentes el documento A/C.5/53/12, que contiene las estimaciones revisadas correspondientes a 1998 para el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Después de la aprobación de la resolución 1160 (1998) del Consejo de Seguridad sobre Kosovo y de la 1166 (1998) por la que se autoriza la creación de una tercera Sala de Primera Instancia, la CCAAP accedió a solicitar nuevos compromisos por una suma de 2.627.300 dólares, en cifras brutas, como consecuencia de las necesidades de 75 puestos temporarios más y de los gastos conexos derivados de dichas resoluciones, así como para gastos imprevistos, incluido el aumento del número de detenidos y la inminente creación de una tercera Sala de Primera Instancia gracias a los donativos en especie. La revisión de las tendencias de los gastos en 1998 demuestra que las economías compensarán esas nuevas necesidades. Por consiguiente, la Asamblea General pedirá que se apruebe una consignación de 68.611.900 dólares, en cifras brutas, que representa una reducción de las necesidades de 217.900

millones de dólares, en cifras brutas. También se ha propuesto la aprobación de una plantilla revisada.

21. En el documento A/C.5/53/13 figuran las necesidades de recursos revisadas para 1999 del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, así como una solicitud de 106.385.200 dólares, en cifras brutas, que representa un aumento de 37.355.400 dólares, en cifras brutas. Se solicitan también 267 nuevos puestos, lo que hace que el número total de la plantilla ascienda a 838. El cometido del Tribunal es proporcionar un juicio imparcial a todos los acusados, sin dilaciones indebidas. Por consiguiente, la propuesta del Secretario General refleja la necesidad de un funcionamiento eficaz, dado el aumento de las actividades resultante de la creación de una tercera Sala de Primera Instancia, la ampliación del mandato para Kosovo y las nuevas actividades de investigación y judiciales. El motivo de la ampliación de la plantilla es proporcionar la necesaria infraestructura administrativa.

22. En el documento A/C.5/53/14 figuran las estimaciones revisadas para el año 1998 en relación con el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. A raíz de la resolución 1165 (1998) del Consejo de Seguridad sobre el establecimiento de una tercera Sala de Primera Instancia, el Secretario General ha solicitado una autorización para contraer compromisos, que ha aprobado la Comisión Consultiva, para sufragar los gastos conexos. Se han preparado las estimaciones revisadas para el año 1998 para que reflejen las nuevas necesidades de recursos en relación con la tercera Sala de Primera Instancia, incluidos 34 nuevos puestos de personal temporario y gastos imprevistos. Sin embargo, un análisis de las tendencias de los gastos para 1998 indica que se espera realizar unas economías de 2.835.700 dólares. Se pide por lo tanto a la Asamblea General que apruebe una consignación revisada de 52.297.900 dólares, en cifras brutas, que representa una reducción de las necesidades de 4.340.700 dólares, en cifras brutas. Se ha propuesto asimismo la aprobación de una plantilla revisada.

23. En el documento A/C.5/53/15 se indican las necesidades de recurso para 1999 del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, así como una solicitud de 80.612.600 dólares, en cifras brutas, lo que representa un aumento de 22.202.200 dólares, en cifras netas, equivalentes al 43,6% de aumento con respecto a la consignación inicial para 1998. Se ha propuesto asimismo aumentar la plantilla en 256 puestos, lo que hace que el número de ellos ascienda a un total de 838. El aumento de las necesidades de recursos para 1999 se debe sobre todo a la creación de una tercera Sala de Primera Instancia, a la intensificación de las actividades de investigación y al aumento de los servicios de apoyo.

24. Actualmente hay 32 prisioneros en el centro de detención de las Naciones Unidas de Arusha. En 1999, se celebra-

rán simultáneamente seis juicios en las tres salas. La Oficina del Fiscal aumentará sus actividades tanto en lo que se refiere a las investigaciones como a los enjuiciamientos, mientras que en la Secretaría se intensificarán los servicios administrativos y jurídicos. La cuantía total de los recursos solicitados refleja la envergadura y la magnitud del aumento de las operaciones que debe realizar el Tribunal para cumplir su cometido.

25. El Sr. Mselle (Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto) presenta el informe de la Comisión Consultiva que figura en los documentos (A/53/651 y A/53/659 y afirma que, en lo que respecta al Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, se han solicitado 68,6 millones de dólares para 1998, más 646 puestos, incluidos los 75 puestos adicionales; para 1999, el proyecto de presupuesto de 106,4 millones de dólares incluye el costo de 838 puestos, como consecuencia de los 267 adicionales, en los que están incluidos los 75 solicitados para 1998. La Comisión Consultiva recomienda una cantidad de 68.090.000 dólares, en cifras brutas, para el presupuesto revisado de 1998 y una consignación de 103.060.000 dólares, en cifras brutas, para 1999. La CCAAP recomienda un total de 777 puestos, de los 838 solicitados, con cargo al presupuesto financiado con cuotas para 1999.

26. En cuanto al Tribunal Internacional para Rwanda, se ha solicitado un presupuesto revisado por una suma de 52,3 millones de dólares para 1998, en la que se incluyen 34 puestos adicionales. Para 1999, el proyecto de presupuesto se ha fijado en 80,6 millones de dólares, y se incorporan a él 256 puestos adicionales, incluidos los 34 solicitados para 1998. La Comisión Consultiva recomienda la aprobación del presupuesto revisado para 1998. En lo que respecta a 1999, recomienda una consignación de 76,2 millones de dólares, en cifras brutas, y un total de 778 puestos de los 838 solicitados con cargo al presupuesto financiado con cuotas.

27. La Comisión Consultiva ha realizado un amplio examen de los presupuestos de ambos Tribunales y sus informes contienen numerosas observaciones y recomendaciones sobre su funcionamiento y sobre los factores que han llevado a solicitar recursos adicionales. Aun cuando ha mejorado considerablemente el formato y la presentación de los presupuestos, la Comisión Consultiva cree que habría que perfeccionarlos aún más. Aun cuando los Tribunales han cubierto muchos de los puestos autorizados, las vacantes siguen siendo numerosas, razón por la cual la Comisión Consultiva opina que hay que reducir la actual tasa de vacantes considerablemente antes de que se pueda determinar si se necesitan más puestos. Además, parece haber una tendencia a solicitar puestos y otros recursos para hacer frente a cualquier posible novedad que parezca vaya a presentarse. La opinión de la

Comisión Consultiva es que, dado que los Tribunales cuentan ahora mismo con un considerable número de puestos, antes de solicitar recursos adicionales habría que esforzarse más por calibrar hasta qué punto se pueden absorber más funciones.

28. Por último, la Comisión recomienda que se encargue a expertos realizar una evaluación de ambos Tribunales. Sus recomendaciones al efecto figuran en los párrafos 65 a 67 de su informe sobre el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (A/53/651) y en los párrafos 84 a 86 de su informe sobre el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (A/53/659).

29. El **Sr. Sial** (Pakistán) afirma que su delegación lamenta profundamente el retraso en la presentación de los informes del Secretario General, a consecuencia del cual se han retrasado también los informes de la Comisión Consultiva. Para el eficaz funcionamiento de la Comisión, es requisito previo e imprescindible que se presenten a tiempo los informes, y es preciso abordar de una vez por todas el problema crónico de los retrasos. La forma de presentar los informes no se atiene totalmente a los requisitos exigidos en la parte B de la resolución de la Asamblea General 52/214.

30. Su delegación apoya plenamente el establecimiento y funcionamiento de los dos Tribunales y cree que deberían asignarse recursos suficientes para ello. Está de acuerdo con la recomendación de la Comisión Consultiva sobre la evaluación de ambos Tribunales por un grupo de expertos independientes, que debería realizarse lo antes posible. Sin embargo, es preciso aclarar más la recomendación de que los costos de la evaluación se sufraguen con cargo a los presupuestos de los dos Tribunales.

31. Con respecto a la información facilitada en el anexo V del documento A/C.5/53/15, su delegación señala que no se han cumplido tres de las recomendaciones de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, incluida la de que se reasigne al asesor jurídico del Secretario. Tal situación pone en primera línea la necesidad urgente de examinar y evaluar la parte B de la resolución 48/218 de la Asamblea General. Su delegación señala que se ha esperado hasta agosto de 1998 para aceptar algún personal proporcionado gratuitamente, e insiste en que hay que aplicar la resolución 51/243 de la Asamblea General.

32. La **Sra. Butschek** (Austria), hablando en nombre de la Unión Europea, afirma que es lamentable la tardanza con que se han emitido algunos documentos. La Unión Europea se reserva el derecho a volver sobre el tema ulteriormente.

33. El **Sr. Sulaiman** (República Árabe Siria) dice que su delegación apoya la opinión del representante del Pakistán en el sentido de que hay que examinar las recomendaciones

de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna que no se han aplicado.

Otros asuntos

34. La **Sra. Incera** (Costa Rica) afirma que, en el Comité de Relaciones con el País Anfitrión, su delegación se ha ocupado de averiguar las reducciones en el número de personal de seguridad. La oradora pregunta cuántos puestos han sido suprimidos, cuántos quedan y si se ha recurrido a la contratación de personal externo.

35. El **Presidente** promete buscar información sobre el tema. El número de funcionarios de seguridad se ha reducido, de conformidad con la resolución 50/215 A de la Asamblea General.

36. El **Sr. Sulaiman** (República Árabe Siria) dice que su delegación comparte las inquietudes de la representante de Costa Rica y que el asunto debe resolverse.

Se levanta la sesión a las 16.15 horas.